

Posteriormente, en diverso acuerdo de **siete de febrero de dos mil veintitrés**, se **turnó** el expediente al Magistrado Octavio Ramos Ramos, para la formulación del proyecto respectivo.

Primero. Competencia. Este Tribunal Colegiado es competente para conocer del presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Federal, 34 de la Ley de Amparo, 38, fracción I, inciso b), y 39 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el contenido del Acuerdo General 3/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; **en razón de que se impugna una sentencia definitiva dictada por una autoridad jurisdiccional en materia administrativa con residencia en este Circuito.**

Segundo. Oportunidad del amparo. La demanda de amparo se presentó en forma oportuna, toda vez que la sentencia reclamada fue notificada al quejoso el **veinticinco de octubre de dos mil veintidós** (foja 75 del expediente de origen), por lo que de conformidad con lo establecido por el artículo 17, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 40 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, el plazo para promover el juicio de amparo **transcurrió del veintisiete de octubre al dieciocho de noviembre de la referida anualidad.**

De dicho plazo deben descontarse los días veintinueve y treinta de octubre, uno, dos, cinco, seis, doce y trece de noviembre del citado año¹, por corresponder a sábados, domingos y feriados, respectivamente, considerados inhábiles para la Sala responsable,

¹ De conformidad con el calendario de días inhábiles del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, consultable en la página electrónica: https://www.tejav.org.mx/Docs/CALENDARIO_2022.pdf



conforme al ordinal 19 de la Ley de Amparo.

Por tanto, si la demanda de amparo fue presentada ante la autoridad responsable el **diecisiete de noviembre de dos mil veintidós**, su promoción es oportuna.

Tercero. Existencia del acto reclamado. La misma quedó acreditada con el expediente relativo al juicio contencioso administrativo que envió la autoridad responsable al rendir su informe justificado.

Cuarto. Innecesaria transcripción. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó en la jurisprudencia **2a./J.58/2010**² que no existe obligación de transcribir los conceptos de violación y la sentencia reclamada para cumplir con los requisitos de exhaustividad y congruencia en el dictado de la sentencia, debido a que esos principios se satisfacen al analizar y dar respuesta a los conceptos de violación o agravios planteados.

Quinto. Antecedentes. A continuación, se exponen los hechos relevantes que integran el juicio natural.

El uno de agosto de dos mil veintidós, el quejoso demandó de la Dirección General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la Controlaría General del Estado de Veracruz, la nulidad de la resolución de veinte de junio de dos mil veintidós, relativa al procedimiento de responsabilidad administrativa 53/2020.

Por acuerdo de **dos de agosto de dos mil veintidós**, la Magistrada de la Segunda Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa **desechó la demanda**, debido a que no agotó el recurso de revocación previsto en el artículo 210 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Inconforme con lo anterior, el aquí quejoso interpuso recurso de reclamación; en consecuencia, mediante resolución de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, la citada Magistrada **confirmó** el acuerdo por el que desechó la demanda.

² Visible en página 830, **registro 164618**, Tomo XXXI, Mayo de 2010, novena época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta “**CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.**”

Sexto. Análisis de los conceptos de violación. Los argumentos defensivos son **infundados**, de conformidad con las consideraciones siguientes.

El quejoso argumenta que se interpretó incorrectamente el artículo 210 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, porque el vocablo “podrá”, debe entenderse como una opción para el afectado, no así la imposición de agotar el recurso de revocación previo a promover el juicio contencioso administrativo.

Alega que atendiendo diversos convenios y al principio pro persona, se debe entender que los recursos administrativos deben considerarse optativos, toda vez que obligar a agotar un recurso administrativo representa un obstáculo al acceso a la justicia.

Refiere que el recurso de revocación a que alude la Ley General de Responsabilidades Administrativas, es un medio ordinario que se interpone ante la propia autoridad que emitió el acto, lo que supone una parcialidad y dilación de dicho medio de defensa, porque a ningún fin práctico se llegaría, con su interposición.

Por lo anterior, aduce que la interpretación del vocablo “podrá” no puede ser arbitraria, sino que debe apreciarse partiendo del análisis de la viabilidad o beneficios de agotar un recurso administrativo; de ahí que, ante la duda, entre si es optativo u obligatorio, debe atenderse la interpretación que mayor beneficio proporcione a la persona, en relación al derecho al acceso a la justicia.

Así, el quejoso argumenta que la autoridad responsable debió determinar que el recurso de revocación previsto en la citada norma es optativo, atendiendo el derecho de acceso a la justicia, en su vertiente de recurso efectivo, lo que aduce implica la obligación más favorable al ejercicio de ese derecho, teniendo en cuenta la razón de la norma, para evitar caer en interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo de un asunto, ya que a ningún fin práctico resultaría obligar a interponer un recurso que resuelve la propia autoridad.

Manifiesta que de conformidad con lo dispuesto en el artículo



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se prohíbe que se entorpezca el acceso a los medios de defensa a través de obstáculos procedimentales y de forma que deriven en denegación de justicia, por lo que es indudable que el derecho en comento tiene el alcance no sólo de que el ordenamiento jurídico prevea medios de impugnación, sino que además deben operar sin formalidades excesivas, carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador, ya que los tornaría ilusorios.

De esta forma, reitera que la palabra “podrá” establecida en el artículo 210 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas implica la posibilidad de elegir entre recurrir o no el acto respectivo, puesto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya estableció que el uso de esa palabra debe entenderse como la posibilidad de acceder al recurso, no como una obligación para hacerlo.

Añade que la autoridad responsable omitió analizar que la jurisprudencia de la Primera Sala del Alto Tribunal de rubro: **“RECURSOS ORDINARIOS. EL EMPLEO DEL VOCABLO ‘PODRÁ’ EN LA LEGISLACIÓN NO IMPLICA QUE SEA POTESTATIVO PARA LOS GOBERNADOS AGOTARLOS ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO.”**, no es aplicable al caso.

Refiere que esto es así, porque dicho criterio ya fue superado en la contradicción que dio origen a la diversa jurisprudencia intitulada: **“ACTOS EMITIDOS EN CUMPLIMIENTO A LO RESUELTO EN UN RECURSO ADMINISTRATIVO. ES OPTATIVO PARA EL INTERESADO INTERPONER EN SU CONTRA, POR UNA SOLA VEZ, EL RECURSO DE REVOCACIÓN ANTES DE ACUDIR AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.”**.

Aunado a que, aduce que el criterio de la Primera Sala es aplicable en relación al juicio de amparo, para el cual sí deben observarse diversas reglas procesales al ser un medio extraordinario, por lo que, reitera, no es aplicable al caso, dado que el recurso de revocación es un medio ordinario que se presenta ante la misma autoridad que emite el acto, lo que compromete su efectividad.

En primer lugar, se destaca que el artículo 210 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece lo siguiente:

Las resoluciones que se dicten en el recurso de revocación serán impugnables ante los Tribunales, vía el juicio contencioso administrativo para el caso del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, o el juicio que dispongan las leyes que rijan en esa materia en las entidades federativas según corresponda.”

La disposición transcrita precisa que las personas servidoras públicas que resulten responsables por la comisión de faltas administrativas no graves, podrán interponer el recurso de revocación ante la autoridad que emitió la resolución respectiva, dentro del plazo de quince días; además, establece que la resolución emitida en el recurso de revocación es impugnabile a través del juicio contencioso administrativo tratándose del fuero federal, o mediante el juicio contencioso que dispongan en materia administrativa las entidades federativas.

En ese orden, conviene destacar que el veintisiete de mayo de dos mil quince, fue publicado el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción; derivado de lo anterior, el artículo 73 Constitucional, en sus fracciones XXIV, XXIX-H y XXIX-V, facultó y constriñó al Congreso de la Unión a expedir, entre otras leyes, una general que distribuyera competencias entre los órdenes de gobierno para determinar las responsabilidades administrativas de los servidores públicos.

Seguido el proceso legislativo, el dieciocho de julio de dos mil dieciséis, se publicó el Decreto por el que se expidió la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y otras leyes, en el



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

que se vio reflejada la iniciativa presentada por un grupo parlamentario el uno de marzo de ese mismo año;³ en cuyo artículo transitorio Tercero se estableció que con la entrada en vigor de la ley general, quedaría abrogada la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como todas aquellas disposiciones opuestas.

En ese contexto, conviene destacar que el artículo 25 de la mencionada ley federal abrogada establecía expresamente que los servidores públicos que resultaran responsables en los términos de las resoluciones administrativas que se dicten conforme a lo dispuesto por esa ley, podrían optar entre interponer el recurso de revocación o impugnarlas directamente ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Sobre estos parámetros, atendiendo la exposición de motivos y la evolución normativa de las responsabilidades administrativas, se aprecia que la intención del legislador al establecer que las personas servidoras públicas “podrán” interponer el recurso de revocación ante la autoridad que emitió la resolución, no alude a una potestad o libertad para decidir libremente si promueve el recurso de revocación o acuden directamente al juicio contencioso administrativo, sino que su propósito consistió en establecer un verdadero mecanismo de impugnación con la finalidad de dilucidar sus derechos o intereses jurídicos ante la autoridad generadora de la resolución administrativa, incluso la oportunidad de ofrecer pruebas, así como suspender la ejecución de la resolución recurrida, tal como se desprende de los artículos 211 y 212 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, precisando además que la resolución emitida en ese medio de defensa será impugnable a través del juicio contencioso administrativo federal o local que corresponda.

Máxime que, en el proceso legislativo que dio origen a la norma que se analiza no fue aprobada la iniciativa presentada por un grupo parlamentario el diez de septiembre de dos mil quince,⁴ en la

³ Publicada en la Gaceta número. LXII/1SPO-95-1869/61081, consultable en la página electrónica https://www.senado.gob.mx/65/gaceta_del_senado/documento/61081

⁴ Al respecto véase la Gaceta número LXII/1PPO-7/57647, consultable en la página electrónica

Además, contrario a lo que argumenta el quejoso, se estima que el recurso de mérito es adecuado y no opera con formalidades excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad.

Aunado a que, se prevé un plazo razonable para interponer dicho medio de impugnación, el cual es de quince días; de conformidad con el numeral 211 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en el que se establecen requisitos mínimos para hacer valer el aludido medio de impugnación, debido a que sólo debe constar por escrito, y contener los agravios que estime el inconforme le causa la resolución y ofrecer las pruebas que sustenten su pretensión.

Además, en caso de que se omita cumplir con esos requisitos, el legislador impone a la autoridad que los subsane, y únicamente en el supuesto de que no pueda, la obliga a prevenir a la parte recurrente para corregir las omisiones respectivas; finalmente prevé el plazo de treinta días para que, una vez desahogadas las pruebas, pronuncie la resolución que corresponda, y ésta se notifique en un plazo no mayor de setenta y dos horas.⁵

⁵ “Artículo 211. La tramitación del recurso de revocación se sujetará a las normas siguientes:

II. La autoridad acordará sobre la prevención, admisión o desechamiento del recurso en un término de tres días hábiles; en caso de admitirse, tendrá que acordar sobre las pruebas ofrecidas, desechando de plano las que no fuesen idóneas para desvirtuar los hechos en que se base la resolución;

III. Si el escrito de interposición del recurso de revocación no cumple con alguno de los requisitos establecidos en la fracción I de este artículo y la autoridad no cuenta con elementos para



Asimismo, se reitera que la intención del legislador fue la de crear un verdadero medio de impugnación al establecer como medida cautelar la posibilidad de suspender la ejecución de la resolución reclamada con la interposición del recurso de revocación siempre que se colmen los requisitos mínimos,⁶ los cuales homologó con los que prevé la Ley de Amparo en materia de suspensión del acto reclamado, con la finalidad de evitar requisitos que resultaran excesivos y gravosos para los servidores públicos sancionados por faltas administrativas no graves; de ahí que, se considera que el recurso de revocación es adecuado y no opera con formalidades excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad.

De igual forma, se considera que no asiste razón al quejoso al señalar que la autoridad responsable al interpretar el precepto en estudio, debió optar por aquella que le otorgara un mayor beneficio en relación al derecho al acceso a la justicia; en razón de que, si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de diez de junio de dos mil once, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio *pro persona*, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; ello no significa

subsananlos se prevendrá al recurrente, por una sola ocasión, con el objeto de que subsane las omisiones dentro de un plazo que no podrá exceder de tres días contados a partir del día siguiente de la notificación de la prevención, con el apercibimiento de que, de no cumplir, se desechará el recurso de revocación.

La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tiene la autoridad para resolver el recurso, por lo que comenzará a computarse a partir del día siguiente a su desahogo, y

IV. Desahogadas las pruebas, si las hubiere, las Secretarías, el titular del Órgano interno de control o el servidor público en quien delegue esta facultad, dictará resolución dentro de los treinta días hábiles siguientes, notificándolo al interesado en un plazo no mayor de setenta y dos horas.”

⁶ **“Artículo 212.** La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resolución recurrida, si concurren los siguientes requisitos:

I. Que la solicite el recurrente, y

II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.

En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere resolución favorable.

Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, la autoridad que resuelva el recurso fijará discrecionalmente el importe de la garantía.

La autoridad deberá de acordar en un plazo no mayor de veinticuatro horas respecto a la suspensión que solicite el recurrente.”

Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia **1a./J. 10/2014 (10a.)**, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 487, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, Décima Época, registro digital 2005717, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de título y subtítulo siguientes:

Con base en lo expuesto, se considera inaplicable la jurisprudencia intitulada: **“ACTOS EMITIDOS EN CUMPLIMIENTO A LO RESUELTO EN UN RECURSO ADMINISTRATIVO. ES OPTATIVO PARA EL INTERESADO INTERPONER EN SU CONTRA, POR UNA SOLA VEZ, EL RECURSO DE REVOCACIÓN ANTES DE ACUDIR AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.”**, puesto de la ejecutoria de la cual derivó, se advierte que la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, analizó una hipótesis legal distinta prevista, esto es, el artículo 125 del Código Fiscal de la Federación, y atendiendo su evolución legislativa, interpretó que la intención del legislador consistió en establecer la que el recurso administrativo es optativo, en ese caso en específico.

CUAUTHEMOC URIEL LARA GARCIA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.02.5e.40
17/08/23 12:44:42

Resuelve:

Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso **Adrián Viccón Basto**, en contra de la resolución de **veintitrés de agosto de dos mil veintidós**, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz, en el expediente **564/2022-2a-1**, de ese índice.

Notifíquese, como corresponda; y de ser el caso, devuélvanse los autos relativos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente, el cual no tiene relevancia documental y es depurable, con apoyo en el artículo 18, fracción III, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales.

Así, por **unanimidad** de votos, lo resolvió el Pleno del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, integrado por los magistrados **Roberto Castillo Garrido**, **Alfonso Ortiz López** y **Octavio Ramos Ramos**; siendo presidente el primero y ponente el último de los mencionados, quienes firman electrónicamente, con excepción del magistrado Alfonso Ortiz López, quien lo realiza de manera autógrafa, lo anterior en términos del **Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación**, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal; con relación al **Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal** de sesión de ocho de junio de dos mil veinte y del punto 24 de la Circular SECNO/16/2020 en los cuales se regula el manejo de instrumentos informáticos, de la habilitación de la Firma Electrónica (FIREL) y su uso, de lo que da fe signando en los mismos términos el licenciado Cuauhtemoc Uriel Lara García, Secretario adscrito a la ponencia 3, **el día de hoy veintidós de marzo de dos mil veintitrés, en que terminó de engrosarse la presente resolución, por así permitirlo las labores del órgano jurisdiccional. Doy fe.**

Firma electrónica

ALFONSO ORTIZ LÓPEZ

Firma electrónica

Firma electrónica

CUAUHTEMOC URIEL LARA GARCÍA

El secretario que suscribe hace constar que esta foja corresponde a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo directo **576/2022**.

SECRETARIO

Firma electrónica

CUAUHTEMOC URIEL LARA GARCÍA

CULG/JSU*



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:
47219450_0957000031288299004.p7m
Autoridad Certificadora:
Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal
Firmante(s): 3

FIRMANTE				
Nombre:	CUAUHTEMOC URIEL LARA GARCIA	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No. serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.02.5e.4c	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha: (UTC/ CDMX)	16/03/23 17:38:23 - 16/03/23 11:38:23	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	30 a9 f3 28 3f de ff 7a 97 07 a3 3c a2 7e 70 aa 99 c1 e0 cd e9 a1 22 c1 ae 86 63 02 14 98 de d5 c6 01 bf f0 96 e4 eb 76 87 0b 43 59 d4 87 1c f9 18 d8 e3 f4 62 69 49 83 f1 fe 71 44 4b 7f 2e ce 73 92 3f 39 b3 7d 09 af 49 2b be 63 25 15 5e 4d ad 51 e5 1c 53 81 9c 3e f2 9b 76 b9 7e 4f bd e4 d9 52 79 20 80 16 2f 43 cd eb 77 ec 23 2d ed 4b 51 b6 c6 5b 2b 00 be 90 04 48 a3 99 cc bf 58 d5 52 ec 2f 0d 55 90 dd 4e a3 64 51 5a 61 00 37 ea a2 8d c4 18 62 52 31 0c 47 98 d6 81 85 f1 0e fa 85 5e 89 d7 5f 4a 7a 22 1d 9f 7d db 77 ab dd 14 cd 11 9c 11 e6 68 49 25 60 c1 e9 43 5c d4 61 c3 8e c1 3f 77 64 5a 64 94 dc 3d 0b 19 d7 47 fb 18 42 78 bd 6e 19 f4 63 fc ef 6d 03 6c e8 7c de 6c 70 a1 13 ed 28 84 a3 8d 8a ff a0 fd e2 6c 43 20 56 58 eb 7e c4 77 e2 e6 c0 ef fb 1e 0e a3 56 c2			
OCSP				
Fecha: (UTC / CDMX)	16/03/23 17:38:23 - 16/03/23 11:38:23			
Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.03			
TSP				
Fecha : (UTC / CDMX)	16/03/23 17:38:24 - 16/03/23 11:38:24			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	53373723			
Datos estampillados:	w+eqDrm99YFBPqubSZf+iBme9jA=			



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	OCTAVIO RAMOS RAMOS	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No. serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.02.5f.e5	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha: (UTC/ CDMX)	20/03/23 02:25:59 - 19/03/23 20:25:59	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	bf fc b7 cc 94 01 d7 d8 1b 07 4b 9f c2 68 17 c8 b0 83 55 3f 70 35 48 44 7b c5 e6 0b 37 b9 a3 22 c2 e5 54 a8 e9 7f 68 9b f7 25 65 c5 87 40 e3 24 e4 92 3b 0b df 63 05 d9 51 f2 2d 0b ab ab 1a 56 89 dc 04 c5 2d 4d 91 23 6c 63 d2 af 05 46 74 cc 3f a5 f9 b1 b0 92 8a 37 e3 2e 49 56 54 99 f5 e1 2b 6a e0 fe ca 9e 83 bd e0 93 79 7b 54 90 d3 fe 64 1e 31 75 c2 53 85 00 22 ad 02 3f 99 c0 f5 af 97 db ca e7 51 e3 0e 4b 39 4f a2 44 49 17 14 d8 f3 79 c4 22 7c d7 ba e9 b3 8d 3c 63 53 2b d4 23 c4 b5 9a 29 f0 30 44 2c 97 96 d5 17 79 64 50 67 e0 36 6a 86 7b ce 87 08 4f 0c 2f 4f 78 bb 3c 59 b0 fc fd 17 6b b8 6d 3c a7 be 03 83 48 bf a1 a0 6e 4a a9 db 23 45 a0 40 fe 76 90 77 de 9a 0e 63 20 00 7e 6b 50 c7 69 79 7f 65 c9 a3 32 a0 43 20 7e dd 39 de a0 50 51 64 a0 22 1c c2 75 01 db 6f			
OCSP				
Fecha: (UTC / CDMX)	20/03/23 02:25:59 - 19/03/23 20:25:59			
Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.03			
TSP				
Fecha : (UTC / CDMX)	20/03/23 02:26:00 - 19/03/23 20:26:00			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	54272625			
Datos estampillados:	PH7E1Ck8MyglfMEhc4LabLqa308=			



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	ROBERTO CASTILLO GARRIDO	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No. serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.02.05.20	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha: (UTC/ CDMX)	22/03/23 15:46:39 - 22/03/23 09:46:39	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	70 4c 3d c6 fc 2c 3d 1f c7 bb 49 2c 8d f1 98 57 39 4d 53 b8 cb d9 70 67 08 98 aa 12 82 91 cf 26 69 28 ca f5 72 1c 80 a4 a8 f3 e4 ca 0b cf 48 87 7e 12 cb fd 68 a3 48 d5 e9 60 57 f3 2a ee 4b b7 ae 4a a2 0b 8b bd 7b 78 68 83 a8 4e 47 b9 d7 77 26 21 7d 22 79 3f bf c4 28 04 5f 1d 23 7f c6 2d fa 34 ef c1 5a a5 17 fc 64 1c 10 71 36 db a5 fc 53 88 38 f9 b9 72 03 66 5c b5 a1 93 c4 8c df 4c 02 32 ce 29 b9 71 38 8e f9 fd b8 b4 b7 5c 43 0a 66 6e 17 07 21 f5 5c ad 50 0a 2b 56 72 2d ff 68 e8 04 24 3d da e2 a2 fe 02 26 46 83 1d 8a 8c 71 2b 1d 4b 8c b7 cc 05 da 16 50 83 cf d6 9e db ae 44 a8 85 19 27 13 7c e6 1c ac 9e d1 05 dc 6b e4 63 f1 6a e8 ff 05 5a a5 12 96 2c 32 21 91 60 46 3d c8 2b b6 d2 c1 b0 a7 cb 2c b4 3e e9 d9 0c f0 c0 f6 68 79 58 ca 0a 1c cd 91 06 b9 eb 20 86 65			
OCSP				
Fecha: (UTC / CDMX)	22/03/23 15:46:40 - 22/03/23 09:46:40			
Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.03			
TSP				
Fecha : (UTC / CDMX)	22/03/23 15:46:40 - 22/03/23 09:46:40			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	54694319			
Datos estampillados:	o2aj928bxbAbSrNjbPNbWMQ1Ey1w=			